

El costo político ¿Y quién lleva la cuenta?

Alfredo Acle Tomasini©

Recién cuando se discutió el presupuesto federal para el 2010 no faltaron quienes advirtieran con un dejo de aparente valentía, que estaban dispuestos a asumir el costo político de sus decisiones. Y ésta no es la primera vez que oímos el mismo sermón, porque esta afirmación forma parte de los clichés que nuestros políticos reiteran con la misma vehemencia de aquel que, mediante una machacona repetición, busca aprender de memoria algo que en el fondo no entiende.

Cabe preguntar si en verdad en nuestra realidad política hay costos que pagar y, sobretodo, si hay alguien que los registre y eventualmente cobre.

En principio se puede decir que el costo político se paga con índices de aprobación, preferencias electorales y, finalmente con votos. Pero, la calidad y eficacia de la cadena de transmisión que liga a éstos indicadores con aquello que un representante popular o alguien que aspira a serlo, decidió, hizo o dejó de hacer, depende de las características del sistema electoral, la cultura política de la ciudadanía y de los valores sociales.

En México, el vínculo que relaciona a los representantes populares con los ciudadanos es débil, efímero y, en buena parte de los casos, circunstancial, lo que se debe a que en nuestro sistema político no está prevista la reelección. Este hecho provoca que la lucha para acceder a una representación popular, que a menudo es la simple búsqueda de un empleo bien remunerado, se dé al interior de los partidos cuyas *nomenklaturas* terminan distribuyendo el pastel, por lo que estar bien con aquellos que ponen las palomas es infinitamente más importante que contar con la simpatía del ciudadano.

En ese sentido destacan los diputados y senadores plurinominales, cuyo origen se justificó en una etapa de transformación de nuestro sistema político que requería de la formación y consolidación de partidos de oposición, y que ahora se han convertido en un medio para que, sin necesidad de hacer campaña, accedan al Congreso sus principales cuadros. Así, los plurinominales son en la práctica representantes – con voto – de sus sendos partidos más que serlo de la ciudadanía.

Para los que si son representantes populares su relación con el ciudadano se limita al proceso electoral, donde como candidatos buscan tan humildes como llenos de promesas, los votos que les permitan acceder a algún cargo. Conseguido esto, el supuesto representado será historia, aunque en el Congreso digan que hablan a nombre del pueblo.

Pero si de suyo, la no reelección obliga al ciudadano a partir de cero en cuanto al conocimiento de los candidatos, las cosas empeoran notablemente si se consideran el número de partidos y cargos en disputa que hay en cada proceso electoral. Por ejemplo, sexenalmente los capitalinos votamos seis cargos de representación popular para los cuales seis partidos nominan candidatos. Pensar que los electores analizan y comparan las “propuestas” de treinta y seis nombres desconocidos sería tan ingenuo como suponer que los elegidos algún día les rendirán cuentas.

A esto se agrega la baja estima que la sociedad tiene por los políticos, y que los ha convertido en una especie de *commodity*. Es decir, productos que pese a tener marcas distintas cuentan con características y propiedades idénticas, por lo que resultan indiferenciables.

En México, salvo la elección presidencial y quizá de gobernador, se vota más por el partido que por el candidato. Aunque eso no quiere decir que exista un alto índice de fidelidad por parte de los electores.

Por otro lado nuestra cultura política es incipiente como resultado de una baja escolaridad. Peor todavía, si consideramos que el grueso de la población, aun en estratos sociales altos, se informa por la vía oral y no a través de la palabra escrita.

Finalmente están los valores sociales. Es simplista pensar que asumir una posición respecto a una política pública conlleva un costo, cuando vemos como nuestros políticos se mudan de partido según les conviene, u observamos cómo algunos ostentan y disfrutan fortunas que no sólo violan la lógica matemática sino que entran de lleno al terreno de lo milagroso; o cómo otros menos audaces viven tranquilos y con holgura largos períodos sin empleo hasta que vuelven a reciclarse.

El costo político supone memoria; se nos olvida. El costo político no admite la impunidad; la toleramos. El costo político supone la exclusión; aquí siguen todos. El costo político lo cobra el pueblo; pero éste ni la cuenta lleva.